JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Noviembre diecisiete de dos mil veintidós.

REF. ACCIÓN DE TUTELA No.2022-01126-01 DE DIANA LISETH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, LILIA DEL CARMEN BOHÓRQUEZ y ROSALBA GUERRERO CARVAJAL, contra la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.,

Segunda instancia.

Se procede por el Despacho a decidir sobre la impugnación formulada por la parte accionante contra la decisión del Juzgado 42 Civil Municipal de esta ciudad de fecha 18 de octubre de 2022.

ANTECEDENTES.

Las señoras **DIANA LISETH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, LILIA DEL CARMEN BOHÓRQUEZ y ROSALBA GUERRERO CARVAJAL**, actuando en causa propia, presentan acción de tutela contra **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**, para que se le protejan los derechos fundamentales, al debido proceso, por no haber aplicado el precedente constitucional.

En síntesis, narran en sus hechos las accionantes que al consultar la página web de LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C. sobre cada vehículo automotor y motocicleta de su propiedad, aparecen registradas (MULTAS de PAGOS DE SUMAS DE DINEROS) por presunta infracción a norma de tránsito y transporte terrestre en el territorio Distrital a través del sistema electrónico de FOTO MULTAS (CÁMARAS SALVAVIDAS). INDIVIDUALMENTE, cada una han solicitado a la accionada; ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.-Secretaria de Movilidad, LA REVOCATORIA DIRECTA de cada resolución que les impuso la sanción administrativa, en cada petición SE INVOCÓ LA NO RESPONSABILIDAD CONTRAVENCIONAL, imputada por EL SOLO hecho de ser propietario del vehículo automotor de conformidad con lo dispuesto en SENTENCIA C-038 DE 6 DE FEBRERO DE 2020 y SENTENCIA C-089/2011 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL que en ellas ha manifestado sobre EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO..

Que la accionada se niega a obedecer, acatar y aplicar en cada caso concreto el mandato con efectos erga omnes por la Corte Constitucional en la sentencia C-038 DE 2.020. Que han interpuestos los recursos de ley, mismos que no han sido atendidos y resueltos por la accionada, con lo cual, sigue en el tiempo y el espacio la violación a la constitución política de 1991, por desconocimiento el precedente constitucional y los derechos ya enunciados.

Dicen que no tienen dinero para contratar un abogado que los lleve al contencioso administrativo para demandar allá LA NULIDAD por violación directa a la constitución política de 1.991 los actos administrativos mencionados.

Solicitan que a través de este mecanismo se conceda a cada una de ellas el amparo constitucional de tutela invocado COMO MECANISMO TRANSITORIO de conformidad con el mandato el ART 86 CONSTITUCIONAL, mientras tramitan ante la defensoria del pueblo la asignación de un abogado para pobres y van al contencioso administrativo a LA ACCIÓN DE NULIDAD Que, por contera, SE ORDENE a la accionada; ACATAR, OBEDECER Y APLICAR en cada caso concreto, lo determinado CON EFECTOS ERGA OMNES por la CORTE CONSTITUCIONAL en LA SENTENCIA C-038 DE 2.020.

Admitida la tutela por el Juzgado 42 Civil Municipal de esta ciudad, con auto de octubre 4 de 2022 se dispuso la vinculación de TRANSUNIÓN (CIFIN), DATACRÉDITO (EXPERIAN), SIMIT, RUNT, DEBANCOFI S.A., SUPERINTENDENCIA FINANCIERA y SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y notificada la parte demandada da respuesta así:

DIRECCION DISTRITAL DE GESTION JUDICIAL

Indica que por razones de competencia la tutela de la referencia, fue trasladada a la Secretaría Distrital de Movilidad, como entidad cabeza de sector central.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Indica que una vez revisadas las bases de datos del Sistema de Gestión Documental - SOLIP y Smart Supervisión, que contienen la totalidad de trámites adelantados por esa Superintendencia, no se encontró queja o reclamación alguna presentada por las accionantes, respecto de los hechos que se narran en la presente tutela. Solicita se les desvincule.

FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS DIRECCION NACIONAL SIMIT

Señala que respecto de acatar, obedecer y aplicar lo dispuesto en la sentencia C-038 de 2020, la autoridad de tránsito que expidió las ordenes de comparendo es quien deberá determinar si se dan los supuestos de hecho y derecho para decretar y conceder lo solicitado, toda vez que son ellos quienes, en su calidad de autoridad de tránsito, adelantan el proceso contravencional y quienes ejecutan las multas.

Solicita se exonere de toda responsabilidad, frente a la presunta violación de los derechos fundamentales aducidos por el accionante

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Señala que en lo que atañe a la Superintendencia de Industria y Comercio, no se tipifican los presupuestos legales a que se refieren los artículo 1, 2, y 3 y normas análogas del Decreto 2591 de 1991, y menos aún, que esa Superintendencia haya vulnerado los derechos constitucionales a los que alude el accionante Que hay una falta de legitimación en la causa por pasiva.

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Dice que es improcedente la acción de tutela para discutir las actuaciones contravencionales por infracciones a las normas de tránsito. Que el mecanismo principal de protección esta en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que, el procedimiento contravencional por infracciones a las normas de tránsito, actuación en el marco de la cual le fue impuesta la orden de comparendo electrónica con base en la cual la parte accionante eleva su solicitud de amparo, es un procedimiento adelantado en el ejercicio de la facultad sancionatoria con la que está revestida la Administración, por lo que si la parte accionante buscara aprovechar la rapidez de la acción constitucional de tutela para provocar un fallo a su favor, que le permitiera no cumplir con la sanción que le fue impuesta por la Secretaría Distrital de Movilidad, es de advertir que tales argumentos han debido ser valorados y decididos en el proceso contravencional, y eventualmente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de manera que no se cumple con los requisitos de subsidiaridad e inmediatez.

EXPERIAN COLOMBIA S.A. DATACREDITO

Aduce que no está llamada a mediar en las diferencias que puedan existir entre la parte accionante y entidades que administren bases de datos diferentes a las manejadas por este Operador de la Información como el SIMIT.

Manifiesta que EXPERIAN COLOMBIA S.A. – DATA CREDITO no presta servicios financieros ni comerciales de ningún tipo a la parte accionante ni conoce las circunstancias que enmarquen el reporte negativo que pueda presentar la parte accionante en la base de datos administrada por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Se recalca que la base de datos administrada por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD resulta ser una base de datos totalmente independiente a la manejada por EXPERIAN COLOMBIA S.A. – DATA CRÉDITO. Razón por la cual le sugiere a la parte accionante que se dirija directamente a las Entidades Públicas o de cualquier otra índole que administren dicha información con el fin de resolver la disputa que esboza en el escrito de tutela.

RUNT

Señala que la Concesión RUNT S.A. es una sociedad de naturaleza privada que ejecuta el contrato de concesión 033 de 2007, suscrito con el Ministerio de Transporte, pero NO constituye autoridad de tránsito de las descritas en el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, razón por la cual, carece de competencia para conocer de cualquier reclamación relacionada con multas y comparendos.

ALCALDIA MAYOR

Indica que por competencia fue enviada la tutela a la Secretaria de Movilidad.

El Juzgado 42 Civil Municipal negó las pretensiones de la tutela mediante sentencia de Octubre 18 de 2022, fallo contra el cual impugno la parte accionante.

CONSIDERACIONES:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Respecto al derecho del **debido proceso administrativo**, la Corte ha dicho que este derecho es ante todo un derecho subjetivo, es decir, que corresponde a las personas interesadas en una decisión administrativa, exigir que la adopción de la misma se someta a un proceso dentro del cual se asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicción, impugnación y publicidad. En este sentido, el debido proceso se ejerce durante la actuación administrativa que lleva a la adopción final de una decisión, y también durante la fase posterior de comunicación e impugnación de la misma.

El **debido proceso administrativo**, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión. En esta medida, las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico.

La Constitución Política dispone la procedencia de la acción de tutela contra los actos y omisiones de las autoridades públicas, cualquiera sea la naturaleza de aquellos, siempre que se trate de proteger un derecho fundamental y carezca el afectado de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del caso concreto

La acción constitucional presentada es con el fin de que se ordene a la parte accionada acatar, obedecer y aplicar en cada caso concreto, lo determinado con efectos erga omnes por la Corte Constitucional en la sentencia C-038 DE 2.020, por consiguiente se revoquen los actos administrativos dictados en su contra.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Procedencia de la acción de tutela

Legitimación activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “*el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa*”. En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el presente caso se encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa toda vez que la tutela la presentan **DIANA LISETH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, LILIA DEL CARMEN BOHÓRQUEZ y ROSALBA GUERRERO CARVAJAL,**

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales. En este caso la parte accionada es LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

Inmediatez

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales, cumpliéndose en este caso dicho requisito.

Subsidiariedad

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En este caso se estudiara si se cumple o no con este requisito.

De los hechos narrados en el escrito de tutela, lo pretendido por la accionante y las respuestas allegadas por las entidades accionadas, la presente acción de tutela no está

llamada a prosperar, toda vez que la controversia que se plantea debe ser dirimida en otro escenario y no en el constitucional, pues la revocatoria solicitada por la parte accionante sobre las resoluciones dictadas no es competencia del juez constitucional.

La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir actos administrativos. Por lo tanto, el demandante cuenta con otros mecanismo de defensa a los cuales debe recurrir para controvertir los actos administrativos, proferidos en el marco del tramite dado a las contravenciones.

La alta Corporación ha dicho que, las acciones de tutelas que se interponen en contra de los actos administrativos, por regla general, son improcedentes, en tanto que existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Solo la Jurisdiccional Contencioso Administrativa puede revocar, anular o dejar sin efectos los actos administrativos dictados por las autoridades, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si a ello hay lugar y no el Juez constitucional como lo pretenden las accionantes.

Por consiguiente no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la tutela como es el **principio de subsidiariedad**, toda vez que el accionante tiene otros mecanismos a los cuales acudir.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior, solo procede como mecanismo de protección definitivo *(i)* cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o *(ii)* cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales invocados, a la luz de las circunstancias del caso concreto.

Por tanto, no es la acción constitucional de tutela, la apropiada para esta clase de conflictos y por consiguiente el amparo invocado no tiene prosperidad y el fallo que en via de impugnación se ha estudiado debe confirmarse ya que no amerita nulidad ni revocatoria alguna.

Por estas razones ha de confirmarse el fallo de primera instancia, el cual ,se ajusta a normas legales y constitucionales.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- CONFIRMAR El fallo de tutela proferido por el Juzgado 42 Civil Municipal de esta ciudad de fecha 18 de Octubre de 2022.

2º.- Notifíqueseles a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3 . Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 027 Escritural

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **57c2895793a32d61b15820e2b2b18c43085f489e13514f3d9dee65dd28c623cb**

Documento generado en 17/11/2022 08:37:07 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>